

LA SUPERACION DE UN 15 DE OCTUBRE FRACASADO

El 15 de octubre de 1979 fue y sigue siendo una fecha importante en la historia reciente en El Salvador. Lo es, sobre todo, por el proceso que ha desatado, pero lo es también por lo que en sí mismo significó. Vamos a comenzar nuestra reflexión editorial con este segundo aspecto.

El 15 de octubre significó la convicción generalizada de que la conducción política del General Romero, que no era sino la continuación agravada de la conducción política de sus antecesores, no tenía ya legitimidad y carecía así mismo de viabilidad. En esta convicción coincidían, aunque en diverso grado y por distintas razones, toda la franja de la oposición política y, sobre todo, las organizaciones político-militares y sus correspondientes movimientos de masas; coincidían también observadores alejados de la actividad política como la Iglesia de Monseñor Romero, buen grupo de intelectuales y profesionales, las clases medias y la opinión pública generalizada; coincidían finalmente una buena parte de militares y hasta los Estados Unidos.

La convicción no era tan unánime ni sobre las causas del fracaso de los regímenes anteriores ni sobre los remedios más oportunos. Había sí una intuición fundamental de que la última causa de los males del país estaba en la existencia y predominancia de una clase social, que no sólo usufructuaba injustamente la mayor parte de la riqueza del país sino que controlaba injustamente también todos los principales centros de decisión política; pero en muchos esto no pasaba de ser una idea general, casi un tópico de modo que se les escapaba la raíz y la extensión de este mal. Se creyó entonces que limitando los abusos de

esa clase se podría cambiar sustancialmente la situación, sin percatarse de que esos abusos son necesarios siempre que se dé esa clase y sin percatarse que esa clase estaba en posibilidad de infiltrar y corromper todos los estratos sociales y todas las instituciones: desde el ejército a la Iglesia, desde los sindicatos a los funcionarios públicos, desde los medios de comunicación a la conciencia colectiva.

El 15 de octubre con todo significó la convicción y la decisión en importantes sectores del pueblo salvadoreño de cambiar de rumbo, de destruir el esquema político que ha predominado por décadas en El Salvador. El 15 de octubre se convertía así en un signo más del fin de una época, aunque no anunciaba todavía los rasgos fundamentales de lo que debiera ser el principio de la nueva. Por falta de claridad en este punto, el proceso se condujo desde el primer momento de forma equivocada.

Las equivocaciones fundamentales fueron las siguientes: a) excluir del principio de solución al pueblo organizado y a las organizaciones revolucionarias, que son el enemigo principal de esa clase dominante, responsable última de la situación del país; b) basar todo el proceso en una Fuerza Armada, de la que no se conocía su grado de corrupción y su compleja red de implicaciones con la clase dominante, unas conscientes y otras inconscientes; c) pensar que es posible una solución media o centrista entre la clase dominante y la clase revolucionaria en un país como el nuestro con su específico estadio de desarrollo (condiciones objetivas) y con el grado de conciencia adquirido (condiciones subjetivas); d) confiar en que sin un corte decisivo con los hombres y las prácticas puestas al servicio del anterior orden socio-económico y político se podría hacer algo de verdad nuevo. Con estas cuatro equivocaciones fundamentales el fracaso era seguro y lo que se quiso resolver en vez de mejorarse ha empeorado, objetivamente, aunque ese mismo empeoramiento ha suscitado dialécticamente el proceso y las fuerzas que lo pueden superar.

La actual alianza del sector derechista de la Fuerza Armada con el sector derechista del Partido Demócrata Cristiano, en quienes se ha concretado la tarea de llevar a cabo los propósitos del 15 de octubre son la objetivación manifiesta de esa cuádruple equivocación. No quieren trato alguno con el sector popular y revolucionario, no cuentan con otro apoyo interno sólido que el de una facción de la Fuerza Armada, pretenden situarse en la equidistancia de dos extremos, que aglutinan no todas las fuerzas del país, pero sí las políticamente operantes, y no se han librado, sobre todo en el sector militar, de los hombres y de las prácticas habituales en el régimen anterior.

Este análisis teórico queda absolutamente comprobado por los hechos ocurridos a lo largo de este año. Dos de los artículos de este mismo número de la revista lo prueban hasta la saciedad en dos aspectos cruciales: el del genocidio y el de la situación económica. Nunca estuvimos tan mal por lo que toca a la represión y nunca fueron tan negras las perspectivas económicas desde hace al menos cincuenta años. Apoyados en este segundo aspecto la extrema derecha reclama su vuelta al poder económico, sin reconocer que su esquema de solución ya ha sido probado con absoluto fracaso y sin reconocer que su nueva presencia en el poder político y militar no haría sino llevar más rápidamente adelante la tarea genocida. Apoyados en el primer aspecto los analistas más razonables en el interior y en el exterior del país concluyen que el presunto reformismo de la actual Junta no es viable porque tiene como condición indispensable una terrible cuota de represión y de tolerancia con los cuerpos represivos, lo cual genera una intranquilidad social y una respuesta popular que hacen de momento inviable todo desarrollo económico y aun todo plan de emergencia. El fracaso de las reformas no está en que las reformas no sean necesarias sino entre otras razones en que están indisolublemente conectadas con la represión que las hace totalmente inviables. El artículo dedicado al análisis de la reforma agraria muestra hasta qué punto esto es así.



Tras diez meses en el poder la actual Junta Militar demócrata-cristiana y el proyecto político que representan deben ser vistos como un fracaso frente al problema que se quería resolver con el 15 de octubre. Su permanencia en el poder está vinculada a una Fuerza Armada, que ha demostrado que ella sola, tal como está actualmente configurada y jerarquizada, tiene que contar forzosamente con la represión genocida. El que no haya podido ser encontrado ni castigado —a pesar de estar perfectamente localizados— uno solo de los altos responsables de la represión demuestra que la actual Junta no tiene la capacidad, tal vez ni la voluntad eficaz, de romper con el proyecto de la derecha. Su actuación en estos diez meses demuestra que no representa ningún centro, pues si algo centristas son sus reformas, la totalidad de su manera de gobernar, que es la que da sentido a las reformas, es de claro sentido derechizante. La contradicción aparente entre unas reformas que golpearían a la extrema derecha y una represión que golpearía a la extrema izquierda, no es una contradicción real porque las reformas están subordinadas a la represión e invalidadas por ésta, con lo que el elemento sobredeterminante del proceso es la represión y la fuerza real que lo respalda un sector militar en su parte más decisiva infiltrado y corrompido por el capital y por un pasado no del todo limpio.

Porque, ¿cuáles son las características fundamentales de la actual alianza en el poder? Veamos algunas de ellas: a) no es una alianza con el sector progresista del ejército sino con el sector derechista tanto en sus ideas políticas y económicas como en sus prácticas represivas, por más que hayan dejado, aparentemente, fuera del aparato militar oficial a algunos de los hombres más siniestros y fanáticos; b) no es una alianza con el sector progresista económico pues es clara su vinculación con la Alianza Productiva que no es sino la cara remozada de la anterior gran empresa privada; c) no es una alianza con el sector progresista político, pues todo él, incluso los mejores miembros del Partido Demócrata Cristiano se han dado de baja públicamente del gobierno y del partido; d) cada vez hace más difícil, por no decir imposible, el diálogo y la negociación ya no con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) pero ni siquiera con el Frente Democrático Revolucionario donde están los antiguos aliados de la Democracia Cristiana; e) ocho de sus diez meses de gobierno han sido conducidos bajo Estado de Sitio que dificulta hasta el máximo todos los esfuerzos del sector democrático; f) la respuesta a los conflictos sociales y laborales ha sido la intervención militar —caso de la Universidad de El

Salvador— y la militarización de las principales entidades autónomas, así como la amenaza de despido fulminante a los trabajadores públicos en caso de huelga —Decreto 296—; g) la total impunidad con que cuerpos paramilitares, en conexión con elementos de la Fuerza Armada, asesinan a campesinos, obreros y a más de 150 maestros; h) la armamentización de los antiguos miembros de Orden para el acoso y asesinato de los miembros de las organizaciones populares o simplemente de quienes no aceptan unirse a ellos; i) la represión por la propia Fuerza Armada, ya que la mejor parte de las víctimas han caído en operativos militares contra la población civil; j) la sistemática persecución a la Iglesia con más de 200 acciones hostiles, entre las que resalta el asesinato de Monseñor Romero, dinamitación y ametrallamiento del Arzobispado, de la YSAX, de residencias religiosas (cfr. comentario y documentación sobre Persecución a la Iglesia en este mismo número); k) la represión a los educadores con el asesinato en los últimos días del Rector de la Universidad de El Salvador, Ingeniero Félix Antonio Ulloa; l) supresión por la fuerza y constantes amenazas a los pocos órganos de difusión que mantienen un espíritu crítico. Y sobre todo la dependencia del capital y de los Estados Unidos así como su incapacidad de apertura a las exigencias del sector popular y revolucionario.

Basten estos rasgos para llevar a nuestros lectores a la convicción de que la actual solución no ha podido conseguir, ni podrá hacerlo, el cumplimiento mínimo de lo propuesto en el 15 de octubre. La actual solución, a pesar de las apariencias, ha regresado en lo fundamental a lo que el 15 de octubre pretendió cambiar; peor aún, ha situado al país entero en una situación más calamitosa y desesperada de lo que estaba en tiempos del General Romero. Desde 1932 nunca fue tanta y tan prolongada la represión, que hoy puede considerarse como un auténtico genocidio; nunca fue tanta la inseguridad social ni la indefensión del hombre de la calle ante los abusos de los cuerpos de seguridad y de las bandas paramilitares conectadas con ellos.

La única disculpa que el actual gobierno da es que las muertes son ocasionadas por los combates entre sí de dos extremismos, el de izquierda y el de derecha. La falsedad de esta disculpa la evidencian dos hechos fundamentales. La mayor parte de las muertes infligidas a los partidarios del proyecto popular son causadas por la Fuerza Armada incluso si dejamos de lado los enfrentamientos militares, propiamente tales, en los que las víctimas causadas al sector popular son más bien escasas; de unos seis mil muertos comprobados, muertos fuera de enfrentamientos, que son

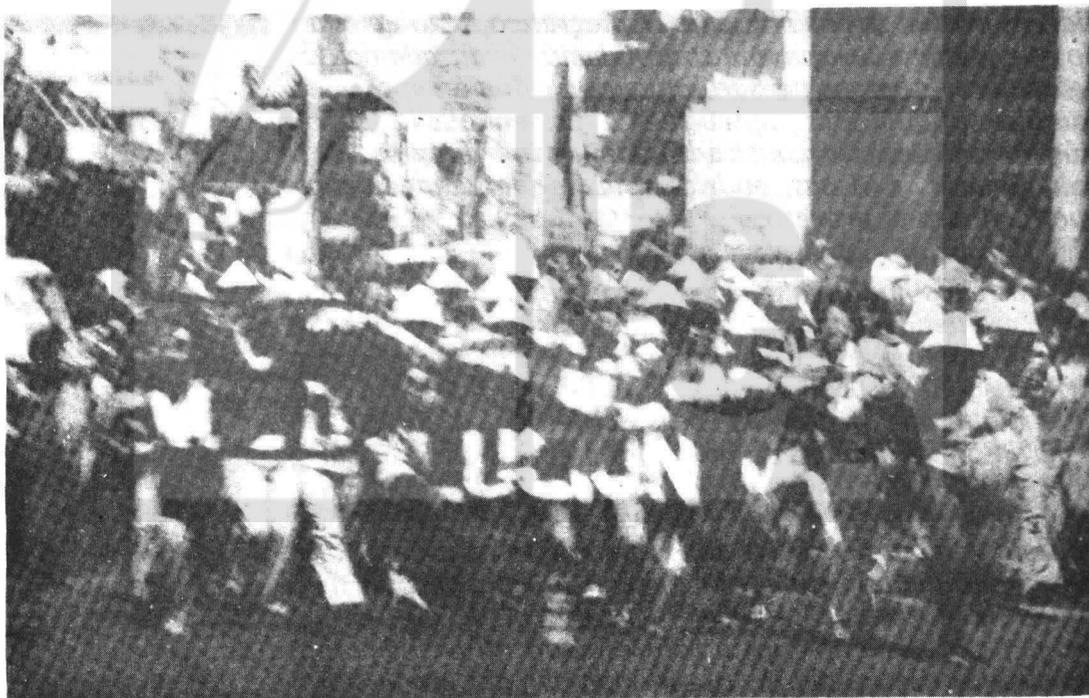


sobre todo campesinos, obreros y estudiantes, unos cinco mil quinientos lo han sido por el ejército y los cuerpos de seguridad. El segundo hecho que evidencia la falsedad de la disculpa lo muestra que el resto de las muertes, sobre todo las más cualificadas —casos como el de Monseñor Romero, 150 maestros muertos, el Rector de la Universidad Nacional, varios sacerdotes, dos miembros de la Comisión de Derechos Humanos, etc.— más directamente atribuidas a grupos paramilitares, así como un gran número de ataques con bombas, ametrallamientos, etc., nunca han sido castigadas por el gobierno, que no se preocupa para nada de descubrir y juzgar a los terroristas de derecha.

Estos dos argumentos principales, el de que la estructura política del gobierno es de derecha y el de que favorece, tolera o es impotente ante la represión, son prueba suficiente de que el actual gobierno no es de centro ni puede serlo, a pesar de los intentos de algunos de sus miembros. No puede serlo, en primer lugar, porque para su subsistencia depende principalmente de fuerzas de extrema derecha, sin que esto obste a que esa extrema derecha lo vaya condicionando todavía más hasta expulsar de él a quienes no se sometan totalmente a sus dictados. Pero no puede serlo, en segundo lugar, porque lo que había de centrismo reformista tanto en el Partido Demócrata Cristiano y aun en la propia Fuerza Armada o han abandonado ya las posiciones del gobierno para pasarse a las del Frente Democrático Revolucionario o están dispuestos a hacerlo en cuanto las circunstancias sean propicias. Aun la presencia del Coronel Majano en la Junta y de un sector progresista en la Fuerza Armada es prueba de lo mismo, tanto por sus constantes declaraciones de que el actual proyecto político no está cumpliendo lo que se propuso el 15 de octubre como por sus denuncias de que en el gobierno y en la Fuerza Armada se escudan los responsables de la represión que así actúan con total impunidad. El último atentado contra el Coronel Majano prueba hasta qué punto su posición en favor del pueblo y en contra de la represión resulta intolerable para el actual sistema.

Todo ello nos confirma en la posición que expusimos en el Editorial de marzo-abril. La actual solución representada por el gobierno militar demócrata-cristiano no es viable para sacar al país del caos y de la muerte. Diez meses de gobierno lo demuestran. En vez de mejorar la situación la han empeorado hasta límites intolerables. Ellos mismos han ido de mal en peor. Y como ellos han pretendido ser la solución de centro ante dos extremas, se ha demostrado que ese modo de entender el centro no es viable, no es posible en el país.

Para salir de esta situación se han buscado a lo largo de estos diez meses tres tipos de solución. La primera es la representada por quienes han intentado a lo largo de este año tres golpes de Estado. Tras ella están los militares más derechistas, muchos de los cuales están de baja o en disponibilidad, pero que cuentan entre los de alta con poderosos aliados, aquellos que están propiciando la represión y la tolerancia colaboradora con los grupos para-militares. Sus aliados civiles son los representantes del capital y de las clases sociales que están a su servicio. El último golpe preparado para los primeros días de noviembre a la espera del triunfo de Reagan implicaba el asesinato del Coronel Majano para evitar dentro del ejército a quien les hace mejor resistencia.



El otro tipo de solución es la actualmente en el poder con ligeras correcciones. Supone también la eliminación del sector progresista del ejército, cuya cabeza más visible es el Coronel Majano, pero no mediante su asesinato sino mediante el aislamiento. Al ver la imposibilidad de captar al sector reformista de la Fuerza Armada para la solución actual se optó por marginarlo. Este es el sentido de la orden militar de septiembre en la que culminan una serie de maniobras para retirar a los majanistas de los puestos de mando militar. Esta solución propone una Asamblea Constituyente para 1982 y elecciones presidenciales para 1983; pretende que el poder militar se someta al poder civil especialmente al Ingeniero Duarte, quien sería el conductor máximo del proceso. Es la solución propugnada hasta ahora por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Contaría con el apoyo de algunos militares que lo mismo podrían estar con la anterior solución que con ésta. Se buscaría para ella el apoyo de fuerzas sociales centristas como son algunos sindicatos y uniones campesinas. Y se trataría de conquistar al capital hoy representado por la Alianza Productiva, que podría ser parte, como en el caso de los militares, tanto de la anterior como de esta solución.

La tercera solución que, el sector majanista del ejército intentó forzado por los acontecimientos en los primeros días de septiembre, suponía una toma del poder por los militares reformistas como una etapa de transición a un diálogo profundo con el Frente Democrático Revolucionario que pudiera llevar a una consolidación avanzada del 15 de octubre. Algunos pensaron que esta solución apoyada, como se suponía, por alguna fuerza disidente de la Dirección Revolucionaria Unificada y de la Coordinadora Revolucionaria de Masas, podría ser la verdadera mediación que facilitara el proceso.

Los acontecimientos y el análisis de las fuerzas que están tras ellos han invalidado esas tres soluciones. Aunque la tercera tenía mejores posibilidades intrínsecas, su desenvolvimiento mostró lo siguiente: a) dentro de la Fuerza Armada y de la propia Junta de Gobierno hay un sector importante que viendo las cosas desde dentro no está de acuerdo con el modo con que se está gobernando el país; b) este sector, no tuvo y no tendrá en fecha próxima suficiente fuerza para derrotar al sector militar que les es opuesto y busca su destrucción aunque sí lo suficiente para no ser aniquilada; c) una solución al problema del país sustentada principalmente en la Fuerza Armada aun en su sector progresista no cuenta con respaldo suficiente como para servir de transición, cuanto menos para ser la solución definitiva.



Cnel. Adolfo Majano

La segunda solución es con mayor razón inviable. No es sino una pequeña variante de la actualmente vigente y, por tanto, está demostrada como inservible. El juicio ético que merece puede escucharse en las palabras de Monseñor Romero, analizadas en el artículo correspondiente de esta misma revista.

Se dirá que la primera solución no ha sido probada, aunque sí intentada y que la elección del republicano Reagan puede facilitar su acceso al poder. Sería una solución de extrema derecha, que ya sin tapujos ni reservas se dedicaría a la aniquilación del movimiento popular, amparada por la acusación de que todo lo que no es capitalismo es comunismo. Es posible que esta solución acceda al poder. Pero es una solución que no es ni ética ni pragmáticamente tolerable.

Ante todo, porque en lo fundamental no sería sino una variante del actual gobierno, que ya ha demostrado su incapacidad y su ferocidad precisamente por los influjos en él de la extrema derecha. En segundo lugar, porque implicaría una represión todavía más intensiva e indiferenciada, que multiplicaría hasta lo inimaginable las víctimas actuales. En tercer lugar, porque suscitaría mayor radicalidad y mayor violencia en la izquierda, que ya ha demostrado no ser fácilmente dominable. En cuarto lugar, porque no cuenta con hombres con capacidad política de gobierno. En quinto lugar, porque se enfrentaría con el repudio internacional de los países verdaderamente democráticos. Es posible, sin embargo, que esta solución se intente, pero debería ser combatida por todas las fuerzas democráticas dentro y fuera del país. Nos situaría en posición semejante a la que actualmente tiene Bolivia, con el agravante de que aquí las fuerzas populares son mucho más poderosas y están mejor organizadas.

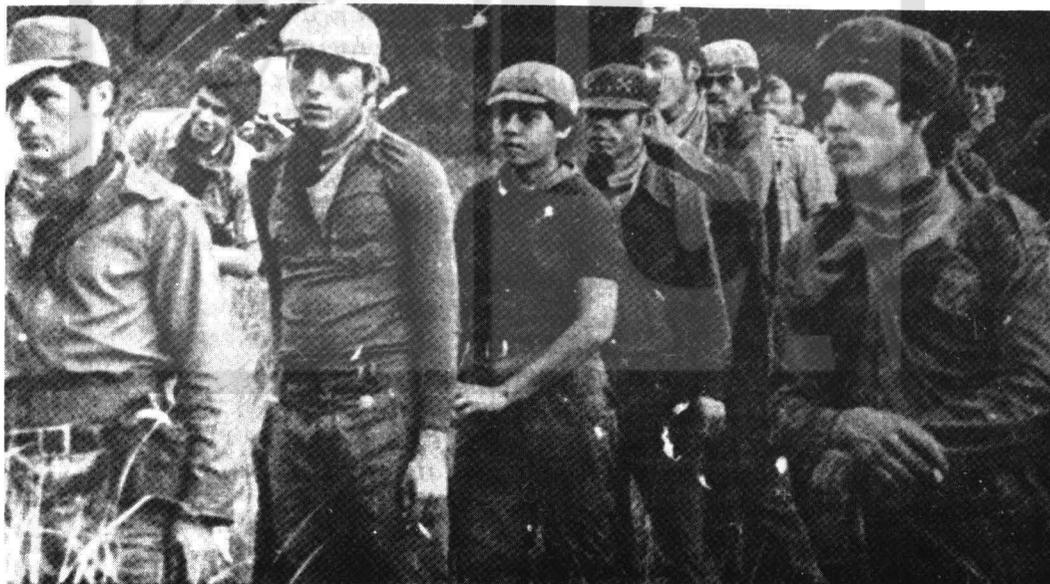
Por todo ello seguimos sosteniendo, como lo hacíamos en nuestro editorial de ECA (marzo-abril 1980), que la solución general no puede ser otra finalmente que la representada por el Frente Democrático Revolucionario, respaldado por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Los sucesos, tan rápidos y tan intensos, ocurridos en estos seis meses, confirman las razones y pronósticos que entonces expusimos. Hoy podemos ver quizás mejor sus defectos y sus virtudes pero como éstas son mayores y más prometedoras que aquéllos, seguimos afirmando que se le debe apoyar para que triunfe y para que ese triunfo se racionalice y humanice al máximo. En vez de buscar otra solución que o no tiene bases reales de sustentación o no es sino una variante de la actual, tan trágicamente fracasada, hagamos que se imponga ésta que es ra-



dicalmente nueva y que cuenta con sólidos apoyos en el interior y en el exterior, apoyos que pueden ser multiplicados con ventajas para la facilitación y la racionalización de su triunfo y de su puesta en marcha.

*Los oponentes de esta solución, a la cabeza de ellos una parte del Departamento de Estado, representada por Bowdler y White entre otros, están difundiendo la falsa y calumniosa apreciación de que esta solución de la izquierda democrática-revolucionaria representaría un nuevo **Pol Pot** de sangre y fuego, que se ensañaría aun contra los sectores moderados, una Cuba de sus años más difíciles en que se suprimirían todas las libertades. Y así por el estilo. Pues bien, nada de esto es propuesto por el Frente Democrático Revolucionario ni por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. La plataforma del gobierno democrático-revolucionario admite el pluralismo político dentro de unos límites amplios, defiende un amplio margen de libertad económica para la pequeña y la mediana empresa y aun para las multinacionales, propugna situarse entre los países no alineados con relaciones diplomáticas con todos los países, etc., etc. Quiere para el país —y así lo confiesa— una solución socialista, pero entiende perfectamente que esta solución no puede imponerse de un golpe, debe someterse a las condiciones objetivas de la situación económica y geo-política del país y debe conquistar para sí la aceptación mayoritaria del pueblo salvadoreño. La gran madurez política y la gran humanidad que en conjunto —dejadas fuera algunas excepciones graves— ha mostrado la izquierda revolucionaria, a pesar de estar siendo golpeada tan salvajemente, son argumento suficiente para confiar en su moderación y en su razonabilidad, una vez tomado el poder.*

Indudablemente, esta izquierda democrática-revolucionaria no significa una especie de centro izquierda, como puede entenderse esta denominación en los países desarrollados y democráticos de Europa. La izquierda salvadoreña pretende con toda razón una verdadera revolución para el país, porque esta revolución es una necesidad objetiva y una exigencia subjetiva que ha tomado carne en la conciencia de una gran parte del pueblo salvadoreño. Las cosas tienen que cambiar mucho y pronto, tanto para satisfacer las necesidades objetivas de las mayorías y resolver los problemas estructurales del país como para responder a las expectativas de tanto pueblo que ha sufrido lo indecible para encontrar un futuro mejor para sí y para sus hijos. Razonablemente se puede pedir y exigir a quienes en este país han vivido como si fuera uno de los países del primer mundo, que se sometan a un régimen de disciplina y austeridad, de renuncia a los privilegios, como corresponde a uno de los países más pobres de la tierra. Pero nada de esto debe estimarse como extremoso sino como razonablemente exigido y obligado. Es menester quitar por la fuerza a quien por la fuerza ha impuesto un estado de cosas intolerable en todos los órdenes (político, militar, económico, sanitario, cultural, comunicativo, etc.). Es menester instaurar algo nuevo para lo que se necesitará presión y aun algún grado de coacción. Es menester crear garantías que impidan el regreso de lo antiguo y que dejen ir solidificándose lo nuevo sobre un terreno en ruinas, ruinas físicas y morales que han dejado tras de sí años y años de dominación y desolación.



Junto a esta izquierda democrático-revolucionaria están las fuerzas más sanas, las fuerzas menos contaminadas por la corrupción capitalista que hemos vivido desde siempre en este país. Están el sector revolucionario, el sector popular y el sector democrático. Los tres sectores no son excluyentes ni las fronteras entre ellos pueden señalarse con claridad. Los sectores revolucionarios y popular representan, por un lado, la fuerza eficaz para derrocar al orden actual dominante y la garantía de un orden nuevo en que no se repitan los males del pasado; aunque no fueran capaces por sí solos de triunfar rápidamente en la coyuntura actual, están en condición de impedir que el orden actual sea viable en lo económico, en lo político y en lo social. El sector democrático, en cuanto está aliado con los otros sectores representa la apertura y el pluralismo, la crítica constructiva, la eficacia técnica, el respaldo de las naciones democráticas del mundo.

¿Qué es, entonces, lo que dificulta el que esta izquierda democrático-revolucionaria triunfe definitivamente y tome el poder cuanto antes, dejando atrás esta terrible pesadilla de los diez mil muertos anuales, de la economía destruida, del orden social trastornado?

Por supuesto, están todas las fuerzas que en los regímenes anteriores gozaron de todos los privilegios y todos aquellos sectores que se aglutinaron en torno a esas fuerzas para apoyarse en ellas, recibiendo en cambio algunas ventajas. Pero estas fuerzas, a las que fundamentalmente sustenta el capital acumulado en decenios de explotación, no son actualmente capaces de resistir el ímpetu revolucionario de una gran parte del pueblo que se ha organizado y que está dispuesto a dar la vida en la lucha por la liberación. Es el enemigo principal pero no podría recuperar el terreno perdido desde el 15 de octubre ni siquiera subsistir como clase dominante sin la ayuda internacional y nacional que están impidiendo el acceso al poder de la izquierda democrático-revolucionaria.

Desde el punto de vista internacional, el impedimento más grave y, consiguientemente, el responsable máximo lo constituye el eje Estados Unidos-Venezuela-Costa Rica, que por defensa de sus intereses o por afinidades partidistas están sosteniendo política, económica y, sobre todo, militarmente a un gobierno incapaz de dominar la represión e incapaz de dar solución al país. Si este apoyo, sobre todo de Estados Unidos, no fuese más que político y económico, mal estaría, pero no sería un apoyo decisivo. Lo malo es que Estados Unidos —ya en tiempo de Carter— está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario en el orden militar para que no suba al poder el Frente Democrático

Revolucionario. Porque su propósito fundamental no es tanto apoyar al actual gobierno sino obstaculizar la llegada del nuevo por la simple razón de que no puede esperar que sea pro-norteamericano. Aterrados por la posibilidad de una nueva Cuba, asustados por la posibilidad de una nueva Nicaragua, se han vuelto los cómplices principales del actual genocidio. Esta es la realidad. Estados Unidos no sólo ha sido incapaz de frenar la represión, la matanza inmisericorde de miles y miles de salvadoreños a tiros de las fuerzas gubernamentales; no sólo disimula y aun legitima esa represión con silencios y pretextos increíbles, sino que además ha empezado ya a tomar parte activa en el conflicto armado, en la guerra en que ya con toda claridad está envuelto el país.

Todavía quedan algunos que quieren negar el que se esté dando una guerra civil en El Salvador, engañados por el espejismo de que no es una guerra regular. El enfrentamiento inevitable del que hablábamos en un editorial pasado (marzo-abril 80) es ya una realidad, aunque todavía no haya tomado las características de la ofensiva final. Este conflicto hay que distinguirlo de la represión por parte del gobierno y de los "ajusticiamientos" por parte de las organizaciones político-militares. Es un conflicto armado entre las fuerzas regulares del ejército oficial y las fuerzas regulares del ejército popular.

Que la guerra no sea todavía una guerra convencional no obsta para que se deba hablar ya de una guerra. La batalla de Morazán es una prueba de ello. Casi la mitad del ejército salvadoreño estuvo durante más de quince días en plena batalla con algunos de los batallones del ejército popular. En la batalla se emplearon por parte del ejército oficial: aviones, helicópteros, tanquetas, blindados, artillería pesada y unos tres mil soldados. Pretendían con ello cercar y arrasar a los guerrilleros que habían ocupado una amplia zona de Morazán. El fracaso de la operación fue notorio. Los guerrilleros escaparon del cerco en su inmensa mayoría, a pesar de la diferencia numérica —uno contra diez— y a pesar de la diferencia de armas. Pero lo de menos es aquí el análisis de la operación. Lo importante es señalar esta acción como una muestra palmaria de la guerra. Conviene señalar que en el campo de batalla estuvo uno de los días el Embajador de los Estados Unidos.

Por otro lado está la guerra permanente de acciones esporádicas que causan un constante desgaste en vidas humanas y en recursos militares y estratégicos a las fuerzas del gobierno. En esta batalla permanente de la que forman parte acciones guerrilleras ininterrumpidas, acciones de sabotaje, etc., la peor parte la lleva el ejército oficial, que

suele vengarse con acciones masivas de represión contra la población civil, supuestamente simpatizante del movimiento popular. Es difícil determinar cuántos son los componentes del ejército popular y hasta qué grado ha llegado su armamentización. Pero no parece exagerado hablar de un número no inferior a diez mil, aunque sus armas sean en buena parte de fabricación nacional o capturadas a miembros de la Fuerza Armada. Tampoco son seguras las cifras de bajas en los constantes enfrentamientos y emboscadas, pero cada vez son más altas y demuestran mayor preparación militar (cfr. "Balance Estadístico" Nos. 1 y 2, CUDI, San Salvador).

Pues bien, este ejército popular derrotaría pronto al ejército oficial si los Estados Unidos no prestaran todo el apoyo preciso en cada momento a una de las partes en conflicto. Para prueba un botón. El Washington Post del 8 de octubre recién pasado, informaba de que Estados Unidos está en proceso de entrenar a 300 oficiales salvadoreños en el área militar del canal de Panamá, por lo que el gobierno de Panamá y otros gobiernos democráticos han levantado su protesta.

Todo ello nos lleva a concluir que son los Estados Unidos el mayor responsable de que no suba al poder la izquierda democrático-revolucionaria. Sostienen diplomática y políticamente a la actual Junta: toleran —por decir poco— la terrible represión que se abate sobre el país, aceptándola como un mal necesario; soportan militarmente al ejército oficial con lo cual fomentan positivamente la violencia. Y todavía amenazan con un intervencionismo mayor, el de los marines y el de los ejércitos de Honduras y Guatemala. Es en este contexto donde hay que explicar la premura con que se ha firmado el tratado de paz entre Honduras y El Salvador. Todo ello se ha debido a la intervención de los Estados Unidos con el objetivo en este momento —como lo han confesado públicamente fuentes oficiales hondureñas— de combatir más fácilmente la subversión en Honduras y El Salvador. No debe desconocerse que en la batalla de Morazán el ejército hondureño cubría uno de los flancos de la posible retirada del ejército popular.

Si desde el punto de vista internacional el impedimento más grave es la intervención de los Estados Unidos con el apoyo de Venezuela y Costa Rica, desde el punto de vista interno el impedimento para la subida al poder de la izquierda democrático-revolucionaria está en los actuales mandos de la Fuerza Armada, alentados por el capital salvadoreño y por la política de los Estados Unidos. Ciertamente no todo el ejército está a favor de la actual situación



Sr. Robert E. White,

ni de los medios militares y políticos que se están empleando para resolverla, pero sí lo están los actuales mandos superiores. Y basta esto de momento para que siga adelante la represión, para que siga adelante la guerra y para que siga adelante la destrucción económica, social y política del país.

Llegado a este momento de nuestro análisis, debemos preguntarnos qué fuerzas están a favor de la subida al poder de la izquierda democrático-revolucionaria y qué caminos le quedan abiertos para conseguirlo.

Ante todo, está a su favor la fuerza de la razón. Lo prueba el análisis somero que hemos hecho en los primeros párrafos de este editorial. En la izquierda democrático-revolucionaria se aúnan, cada vez con mayor comprensión y racionalidad, con mayor voluntad y disposición de ánimo, todas las fuerzas políticas que consideran un absoluto fracaso la actual solución y que buscan una salida democrática, aceptada por el sector revolucionario, a la desastrosa y trágica situación que vivimos. Y se aunan no por conveniencia utilitaria sectorista sino porque no se ve en el país otra solución razonable. Si la situación actual y los responsables de la misma son en su conjunto la expresión objetivada de la sinrazón, los que proponen y defienden con sus vidas el cambio de esa situación y son contrarios a los responsables actuales serán en su conjunto la expresión objetivada de la razón. Y la fuerza de la razón, cuando es asimilada por una gran parte de la población hasta sus últimas consecuencias, es una fuerza material invencible. Este es el caso de El Salvador, donde esa fuerza de la razón va materializándose en grupos cada vez mayores.



Ante todo, en el sector revolucionario con una fuerza militar cada vez más poderosa; en el sector popular con una gran capacidad tanto para la paralización económica del país como para la insurrección general; en el sector democrático con una buena capacidad para el desarrollo técnico y político de los programas de gobierno, para la captación de amplios sectores profesionales del país, así como de las clases medias y para la promoción de la aceptación del nuevo poder por los países democráticos del mundo. Está también asimilando progresivamente esta nueva conciencia una parte significativa del actual ejército salvadoreño que, desde dentro, ha sentido la irracionalidad, la inviabilidad y aun la injusticia de los procedimientos actuales para pacificar y democratizar el país.

Internacionalmente están a favor —y podrían estarlo más— países importantes de la zona como México —que ha retirado su embajador de El Salvador—, Panamá —que en estos días reclama ante la OEA la constante violación de los derechos humanos en el país—, Ecuador, Nicaragua, Cuba y algunos pequeños países del Caribe. Lo está la Internacional Socialista con todo su tremendo potencial político y económico. Cada vez lo están más los países europeos, incluso aquellos en que domina la Democracia Cristiana, que cada vez ve con peores ojos lo que sus homónimos de El Salvador están haciendo para descrédito de la democracia y del cristianismo.

Teniendo todo esto a favor queda por preguntarse qué hacer para que se acabe imponiendo, en el más breve espacio de tiempo posible y con el menor costo posible, el gobierno democrático revolucionario. Varias acciones son impostergables tanto en el campo militar como en el campo político.

Ante todo, en el campo militar. No es el punto más importante, pero sí es el punto más urgente. No cabe cerrar los ojos y no es lógico revestirse de pacifismo ante este problema con la repetición mecánica de que la violencia es siempre mala, de que la violencia engendra siempre violencia, de que hay que condenar la violencia venga de donde venga. Estamos ante un hecho: la existencia de un profundo y complejo enfrentamiento militar; estamos ante una necesidad histórica: hay que derrotar a una fuerza militar que es la principal sostenedora práctica de la actual situación de injusticia, de violencia y de represión. Ante esta cruda realidad no caben sino planteamientos objetivos, esto es, planteamientos que respondan a la realidad, aunque no de un modo puramente pragmático.

La idea central para la solución del problema del país por lo que toca al ámbito de lo militar, es la constitución

de un nuevo ejército en que confluyesen lo que queda de mejor técnica y éticamente en el actual ejército oficial y lo que hay de verdaderamente popular en el ejército revolucionario. Es aquí donde el diálogo es posible y necesario. Tenemos ya dos ejércitos y de esos dos hay que hacer uno, un ejército que de obra y no sólo de palabra esté al servicio del pueblo y de la causa revolucionaria, cosa prometida el 15 de octubre, pero que ni se ha cumplido ni puede cumplirse sin una renovación a fondo de la totalidad de la Fuerza Armada. Con este telón de fondo ha de resolverse el actual conflicto por lo que tiene de militar. De lo contrario nos vamos a encontrar con un enfrentamiento cada vez más violento y destructor entre un ejército popular mejor preparado y fogueado y un ejército oficial que va a poner en juego todos sus medios destructivos, incluso los manejados por militares progresistas; nos vamos a encontrar con un ejército oficial cada vez más abastecido de armas, de entrenamiento y aun de aliados por los Estados Unidos frente a un ejército popular cada vez mejor entrenado y más provisionado de armas y de hombres por los sectores revolucionarios del mundo entero. Hay bastante unanimidad en que no debe aceptarse un descarado intervencionismo extranjero y por eso los Estados Unidos harían bien en reflexionar sobre lo que les ocurrió en Vietnam, cuando allá también se situaron en contra del sector popular. Probablemente no va a ser posible evitar un enfrentamiento militar cada vez más violento y costoso. Lo que aquí estamos proponiendo es que ese enfrentamiento se acorte lo más posible —ya está en pleno desarrollo— para que la violencia sea la menor posible. Es en este punto donde deben hacer fuerza los mediadores y los pacificadores, pero ateniéndose en la mediación, por un lado, al derecho moral de la izquierda, a tener una fuerza que defienda sus intereses y les proteja de la tremenda violencia que contra ella ha lanzado la derecha y, por otro, a la realidad objetiva de que muchas de las armas y del poder de destrucción están en manos del ejército oficial, dentro del cual hay sectores verdaderamente democráticos, que quieren también lo mejor para el futuro del país.

Somos conscientes de que estamos proponiendo una solución difícil, no sólo de llevar a cabo sino incluso de ser cabalmente comprendida. Partimos de un hecho: la existencia de un conflicto armado entre partes que ambas son poderosas y que cuentan ambas con su propio ejército. Seguimos diciendo que este conflicto que ya "ha sido" inevitable y que cada vez es más violento debe ser reducido al máximo. Esto se lograría en parte con la declaración de beligerancia entre las partes, o, al menos con el compromi-



so formal de someterse a las leyes de la guerra y a las normas fundamentales del derecho humanitario internacional. Pero tal paso adelante no sería suficiente. El conflicto se haría más corto y menos destructivo si se pactasen las condiciones de un ejército realmente nuevo, puesto totalmente al servicio del proyecto popular que hemos estimado el más racional y patriótico. Aquí debe contarse con los hechos más que con las emociones, con lo posible más que con lo ideal. Creer que una de las partes va a poder triunfar final y rápidamente no parece ser lo más probable. De ahí la necesidad del diálogo y del pacto entre quienes tienen poder para frenar el conflicto y los que tienen voluntad para construir un ejército nuevo. El intervencionismo norteamericano haría casi imposible esta salida.

Esto mismo nos está demostrando que la solución no puede ser puramente militar. Desgraciadamente no está siendo posible el avance popular sin el apoyo de una fuerza militar popular. Surgida —no lo olvidemos— como necesidad de respuesta a la violencia brutal con que se ha pretendido detener primero el avance eleccionario democrático y después el avance revolucionario popular. Sus conquistas no van a poder ser defendidas más que por una fuerza militar como tampoco la solución capitalista puede sostenerse en nuestro país más que por una fuerza militar. Pero siendo todo esto verdad, no debe olvidarse que el problema de fondo es realmente político y no sólo militar y debe ser resuelto política y no sólo militarmente.

A una gran parte del país, por una serie de razones, le falta claridad política para poder adherirse al proyecto popular, para poder aceptarlo y conformarlo activamente. Al ponerse tanto acento en lo militar, al no darse cuenta de la complejidad del conflicto, un buen sector de la población no toma parte. En primer lugar, porque tomar parte le puede costar la vida y, en segundo lugar, porque a veces ni unos ni otros dejan espacio habitable y activable para las fuerzas políticas no militares. Y es necesario que la mayoría de la nación, si es posible, hiciera una gigantesca alianza en que se unieran los antioligárquicos y los anti-imperialistas, en que se unieran los que son salvadoreños democráticos y estén dispuestos, en consecuencia, a dar al pueblo lo que es del pueblo. El FMLN debe pensar que así como la represión por parte del gobierno aparta del proyecto oficial a muchos salvadoreños bien informados y reaviva el fuego de la revolución, acciones que él patrocina desaniman y asustan a buena parte de la población y alientan a otra a prolongar la campaña represiva del gobierno.

El proyecto del FDR debe hacer sentir a todo el pueblo que es revolucionario pero que es democrático, que es democrático pero que es revolucionario. En la difícil síntesis de estas dos dimensiones estriba su capacidad de aglutinar a los sectores democráticos y revolucionarios. Pero esa síntesis no debe ser una mera coexistencia paralela de dos torrentes cualitativamente distintos y que actúan separados, sino que debe ser una síntesis en que ambos sectores se determinen mutuamente en su modo de actuar, en su modo de dirigir el proceso y en su modo de planificar el futuro. Ambos sectores son necesarios y esa necesidad debe quedar reflejada en la concepción de la unidad, en la organización del mando y en el funcionamiento o actividad de todos y cada una de las partes involucradas.





El idealismo revolucionario debe quedar corregido y complementado por el realismo democrático y el realismo democrático debe quedar corregido por el idealismo revolucionario. Las vanguardias idealistas no deben auto-engañarse pensando que todo el pueblo está a su altura revolucionaria, porque una gran parte de la población tiene como norte orientador la satisfacción de sus necesidades materiales, la seguridad y el disfrute de la vida. La retórica revolucionaria puede llevar no sólo al auto-engaño sino también a suscitar recelos entre mucha gente enredada por los medios de comunicación y su campaña de años. Pero también el sector democrático debe comprender que esa gran parte del pueblo que se ha organizado y que ha ofrendado miles de vidas no puede quedar satisfecha por simples arreglos ornamentales, por tibios reformismos.

Para lograr este punto indispensable en el desarrollo del proceso sería menester tener en cuenta algunos elementos importantes, en los que hasta ahora se han cometido fallos.

Ante todo es imprescindible la unidad del sector revolucionario. Como es sabido, después de un comienzo prometedor que llevó a una Dirección Revolucionaria Unificada en la que se coaligaban el PCS, las FPL, el ERP y la RN, ésta última se separó por razones que afectaban a la unidad misma y al modo de entenderla. Hoy parece dispuesta a regresar a una unidad, incluso más profunda que la de la primera etapa, una unidad que va tomando cuerpo en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Es imprescindible, en segundo lugar, el robustecimiento del sector democrático en el interior del país. Este sector democrático debería, tanto por lo que toca al MNR como al Movimiento Popular Social Cristiano, captar orgánicamente el mayor número de bases. Junto con el MIPTES deberían procurar el engrosamiento del torrente democrático, unificado en la repulsa total de la actual situación y del proyecto político impuesto por los norteamericanos. Esto supondría una garantía al interior y al exterior del país para que más y más fuerzas se unificaran en torno al proyecto de gobierno democrático-revolucionario.

Es imprescindible, en tercer lugar, un mejor funcionamiento del Frente Democrático Revolucionario, que realmente debería asumir en el interior lo que de él se aprecia en el exterior: el ser el órgano político del nuevo proyecto. Dentro de él deberían funcionar mejor y más efectivamente las relaciones entre el sector democrático y el sector revolucionario de masas, como anticipo de lo que pueda ser el gobierno democrático revolucionario. Y este FDR debería tener unas relaciones claras y orgánicas, así como funcionales, con el actual FMLN, haciendo respetar su fuerza propia y su autonomía.

Es imprescindible, en cuarto lugar, conseguir un máximo de apoyo internacional. Apoyo internacional para respaldar al ejército popular, no para ensangrentar más a nuestro país sino para obligar a la otra parte a pactar. Apoyo internacional para que el FDR aparezca cada vez más como el genuino representante de los intereses del pueblo de El Salvador en las actuales circunstancias de transición. Apoyo internacional para aislar cada vez más a la actual Junta militar-demócrata cristiana, para ver si lo poco que queda de Democracia Cristiana en el país acaba de liquidar su triste presente, abandona el proyecto actual y se pliega al proyecto popular o confiesa de una vez por todas su ambición y su auto-engaño. Apoyo internacional para conseguir respecto de lo militar el estatuto de beligerancia para ambas partes y, respecto de lo político, un margen siquiera mínimo de respeto de los derechos humanos y de cese de la represión contra el pueblo indefenso.

Esta es la lección que se puede sacar de este año que ha seguido al levantamiento insurreccional del 15 de octubre. Un año con más de diez mil asesinados; un año de violaciones permanentes de los derechos humanos, un año en que han caído asesinados Monseñor Romero y el Rector de la Universidad Nacional junto con más de 150 maestros, un año de zozobra creciente, un año en que el capital ha seguido huyendo del país, un año en que el cré-

dito internacional se nos cierra cada vez más, un año de descomposición social. Pero también un año en que las fuerzas populares han demostrado su crecimiento en poder, en unidad, en racionalidad, en apertura, en decisión de vencer. Decimos lo que vemos y como lo vemos. Creemos cumplir con ello una obligación universitaria y una obligación patriótica. También una obligación cristiana porque en este empeño están en juego la justicia y la liberación de todo un pueblo, que después de tanta sangre y sufrimiento, después de tanta lucha esperanzada tiene todo el derecho a un futuro mejor.

Noviembre 6, de 1980.

